

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **AGUSTÍN DE JESÚS MARÍN MARÍN**
Demandado : **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA**
Radicado : **05001 31 05 020 2017 00291 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – pensión de invalidez de origen laboral -
Decisión : Revoca sentencia condenatoria
Sentencia No : 174

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita se condene al reconocimiento y pago de **pensión de invalidez de origen profesional**, a partir del **23 de noviembre de 2011**, **intereses moratorios** conforme al artículo 1º parágrafo 2º de la Ley 776 de 2002 o en subsidio **indexación**, costas procesales, condenas ultra y extra petita.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que estando el demandante prestando servicio a la Sociedad Minera El Pomo Pinal Ltda., el día 23 de noviembre de 2011 sufrió accidente laboral lastimándose el pie derecho y con herida en la cara; ha sido sometido a diferentes tratamientos médicos por *osteomielitis crónica*, se moviliza con muletas y se encuentra incapacitado para laborar; en el año **2015** la demandada realizó **dictamen** de pérdida de capacidad laboral pero no le entregó el resultado, por lo que el 24 de febrero de 2016 solicitó la respuesta, así mismo, interpuso Acción de Tutela el 12 de abril de ese año, protegiéndose el derecho de petición, en virtud del cual le fue asignada una cita, sin recibir respuesta alguna; por ello, solicitó calificación ante la **IPS Universitaria**, entidad que le asignó el **60.88% de pérdida de capacidad laboral de origen profesional**, con **fecha de estructuración el 23 de noviembre de 2011**.

Respuesta a la demanda:

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA mediante apoderado

judicial, admitió lo referente al reporte de accidente de trabajo, la solicitud de calificación mediante apoderado, en la que se omitió acompañar la documentación indispensable y que, ante la supuesta falta de respuesta, el demandante pudo acudir ante las Juntas de Calificación de Invalidez; asignó cita para ser atendido por especialista en medicina laboral el día 25 de agosto de 2016, sin que se allegara la historia clínica y exámenes diagnósticos, emitiéndose solicitud de exámenes paraclínicos, con fecha para realizar control a la cual no asistió, ni aportó los resultados e historia clínica; pagó al demandante subsidios por incapacidades médicas temporales por valor de \$30.612.428 correspondientes a 1.275 días; la patología *osteomielitis crónica* es ajena a un accidente laboral y el demandante registra activo en el Sistema de Riesgos Laborales. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, formulando las excepciones que denominó falta de título y causa, inexistencia de pleito, petición antes de tiempo, nulidad de pleno derecho del dictamen de la IPS Universitaria, inexigibilidad de la obligación, compensación y pago, ausencia de profesionalidad de la patología, ausencia de mora, prescripción, genérica.

Sentencia de Primera Instancia:

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, **condenó a La Equidad Seguros de Vida a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen laboral**, en cuantía equivalente al **salario mínimo** legal mensual vigente, a partir del mes de **agosto del año 2015**, cuantificado hasta **septiembre de 2018** en la suma de **\$29.751.197**; ordenó incluir en nómina de pensionados al demandante desde **octubre de 2018**, en forma automática y sin que sea solicitado ningún otro documento, con el pago de una mesada pensional no inferior a **\$782.242**, sin

perjuicio de los incrementos legales; **indexación en cuantía de \$5.350.020; absolvió de intereses moratorios**; declaró no probadas las excepciones propuestas por la accionada a quien impuso **costas**, fijando como agencias en derecho la suma **\$1.522.484** en favor del demandante.

Recursos de Apelación:

El apoderado del demandante solicita se reconozca la pensión de invalidez a partir del 17 de julio de 2015, por haberse expedido las incapacidades desde el **23 de noviembre de 2011** hasta el **16 de julio de 2015; intereses moratorios desde el 27 de noviembre de 2015**, toda vez que la demandada conocía el proceso sufrido por el señor Agustín desde el reporte del accidente laboral y pago de incapacidades por **más de 540 días**; existen derechos de petición y una Acción de Tutela solicitando la calificación, con fechas **27 de noviembre de 2015, 24 de febrero y 26 de marzo de 2016**, siendo omisiva la ARL y por ello se debió acudir a la jurisdicción ordinaria.

Por su parte, **la apoderada Equidad Seguros de Vida** sostiene que el **dictamen administrativo de calificación realizado por la Equidad con pérdida de capacidad del 22%**, fue notificado al demandante, su apoderado, al empleador, al Fondo de Pensiones y a la EPS, sin que fuera recurrido por los interesados, se encuentra en firme, con plenos efectos jurídicos, por lo que **el accionante no tiene la calidad de inválido**; el dictamen aportado con la demanda y elaborado por el médico William Vargas no es prueba idónea para determinar la pérdida de capacidad laboral, por incurrir en errores que le restan el valor científico, tales como: se califica la deficiencia del trastorno de

postura y la marcha con la tabla 12.3. y según criterio del Manual Único de Calificación de Invalidez, se contempla de manera integral la deficiencia de la marcha como una unidad de locomoción humana; presenta falta de rigor científico de la deficiencia, haciendo parecer de manera incorrecta e ilegal que el accionante presenta problemas en la marcha, cuando expresamente la tabla señala que se debe calificar íntegramente el compromiso de una extremidad inferior, la que afecta de manera total la marcha; incurre en equivocaciones al asignar valores a las calificaciones del área ocupacional del cuidado personal, vía doméstica, que no coinciden con la realidad del material probatorio obrante en el proceso; desconoce la normatividad legal sobre integración social de personas con limitación Ley 1361 de 1997, Ley 1346 de 2009 y Ley estatutaria 1618 de 2013, entre otras disposiciones; la Sentencia desconoce la permanencia de la vinculación laboral con la empresa minera El Pomo, reflejándose la posibilidad laboral reconocida por el empleador, existiendo incapacidades pagadas no declaradas por el demandante.

Alegatos de conclusión:

Los apoderados de las partes reiteraron argumentos expuestos en el trámite de Primera Instancia y al sustentar los recursos de apelación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, de conformidad con los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia; analizándose si el demandante acredita pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% de origen laboral, para tener derecho al reconocimiento y pago de pensión de invalidez; en caso de mantenerse la decisión condenatoria, se revisará si hay lugar a modificar la fecha del disfrute y al reconocimiento de intereses moratorios.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia, por las siguientes razones:

No es objeto de discusión en esta Segunda Instancia, que el señor Agustín de Jesús Marín Marín sufrió accidente de trabajo el día 23 de noviembre del año 2011, en el Municipio de Segovia, en actividades de minería al servicio del empleador Sociedad Minera El Pomo Pinal Ltda. “*cuando se desprendió material cayendo sobre el trabajador causando lesiones en pie derecho y una herida en la cara*”, según se extrae del Informe de Accidente de Trabajo del Empleador (fls 24 a 26) y así fue aceptado por la demandada.

De acuerdo al documento **historia clínica accidente de trabajo control** emitido por Medicina Laboral de Equidad Riesgos Laborales el día **25 de agosto de 2016**, el estado del demandante para esa época fue descrito de la siguiente manera: “...paciente de 55 años ... con **fractura de tibia y peroné derecho**, con **múltiples manejos quirúrgicos** (11 cirugías), **osteosíntesis e injerto óseo**. Ha presentado retardo en la consolidación asociado posiblemente a osteosíntesis crónica. Realizó rehabilitación funcional. Usa ortesis tipo sarmiento. Últimos RX febrero de 2015 con focos de fractura en diáfisis de la tibia con trabéculas óseas y formación incipiente de cayo óseo. Valorado por última vez por fisiatra el 19 de junio de 2015 (clínica de fracturas – Dr Jesús Arbeláez) y por ortopedia el 8 de octubre de 2014 (Gustavo Adolfo Bacca Insuasty)...” (Negritas fuera de texto, fls 20 a 23).

Previo a la presentación de esta demanda, el demandante acudió ante la **IPS Universitaria**, donde fue valorado el día **21 de marzo de 2017**, emitiéndose calificación el por Médico Laboral José William Vargas Arenas, quien le asignó el **60.88% de pérdida de capacidad laboral con origen en accidente de trabajo y fecha de estructuración el 23 de noviembre de 2011**, día del accidente (fls 17 a 19).

El Juzgado de Primera Instancia accedió a las pretensiones de la demanda explicando en términos generales, que **La Equidad Seguros de Vida** no valoró el estado de invalidez del señor Marín Marín y solo en el trámite del proceso, previo a la Sentencia, **allegó dictamen** calificándolo con el **22.55%** de pérdida de capacidad laboral estructurada el día 9 de agosto de 2018, experticia a la que restó validez, indicando que *no tuvo en cuenta la historia clínica, la deficiencia de la marcha, donde se concluye que hay una importante disminución de la densidad ósea, fracturas*

en peroné, se evidencia compromiso en la tibia, disminución de la talla de las piernas, entre otras anomalías, con fecha de estructuración bastante posterior a la fecha del accidente de trabajo; el actor asistió a audiencia apoyado en bastón y ayudándose de su compañera o cónyuge, concluyendo que no le ha sido posible tener una rehabilitación mínima funcional; que **conforme a la valoración realizada por la IPS Universitaria había lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez**, exponiendo que la aseguradora está obligada al pago de los auxilios por enfermedad profesional o accidente de trabajo, garantizar a los trabajadores afiliados la recuperación de su salud, promover el estilo de vida para los trabajadores, investigar los accidentes y enfermedades laborales, suministrar asesorías técnicas, realizar estudios evaluativos de higiene ocupacional e industrial, según el grado del riesgo, adelantar acciones de cobro de cotizaciones, verificar con exámenes médicos ocupacionales en su labor de seguimiento y control, la merma de capacidad laboral de que fue objeto el trabajador que tiene su cobertura, con el pago de las incapacidades.

Sobre lo que es objeto de apelación, la apoderada de La Equidad Seguros de Vida, sostiene que el señor Marín Marín no tiene la calidad de inválido, ya que *el dictamen administrativo de calificación realizado por la Equidad con pérdida de capacidad del 22%, fue notificado al demandante, su apoderado, al empleador, al Fondo de Pensiones y a la EPS, el cual no fue recurrido por los interesados y se encuentra en firme, con plenos efectos jurídicos.* Frente a este tema tenemos que:

El **artículo 9º de la Ley 776 de 2002** “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”, establece que **se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral** de acuerdo con el

Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación; **en primera instancia la calificación se realizará por un Grupo Interdisciplinario y de presentarse discrepancias, se acudirá ante las Juntas de Calificación de Invalidez².**

Al respecto, debe indicarse que si bien es cierto, no existe prueba de dictamen emitido en primera oportunidad, por parte de la Administradora de Riesgos Laborales demandada en forma previa a la presentación de esta demanda ordinaria y que de todas maneras el interesado contaba con la posibilidad de acudir ante las Juntas de Calificación de Invalidez, también lo es que, como lo ha señalado la **Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, por ejemplo en **Sentencia SL1044-2019**, reiterando SL5280-2018 y SL16374-2015, **el dictamen de las Juntas de Calificación de Invalidez no es prueba solemne y tampoco es un requisito de procedibilidad para el eventual reconocimiento de la pensión de invalidez**, ya que **la parte interesada puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, donde puede efectuarse una nueva valoración**, para que **sea el Juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente**, a efectos de resolver sobre la pretensión demandada; veamos:

² **ARTÍCULO 9º ESTADO DE INVALIDEZ.** Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.

En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 60. de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de Seguridad Social correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen.

El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales, pero el empleador o el trabajador podrán acudir directamente ante dichas juntas.

“...la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez, sean regionales o nacionales, no son pruebas solemnes, de modo que pueden ser controvertidas ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas.

(...)

Así las cosas, el ejercicio de los recursos previstos en el decreto en cita contra los dictámenes que profieren las juntas de calificación de invalidez, no es el único medio con que cuenta la parte contra la cual se pretenda hacer valer, para oponerse y disentir de su contenido, puesto que también puede controvertirlo ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, dentro del proceso, puede hacer uso de la solicitud de una nueva valoración, para que sea el juez quien decida conforme a la sana crítica lo pertinente, a efectos de resolver sobre la pretensión deprecada...”.

Así mismo, en **Sentencia SL877 de 2020** el Órgano de Cierre de la especialidad laboral, señaló que al no exigir la ley determinado elemento de persuasión para acreditar la pérdida de capacidad laboral, **debe respetarse la libertad probatoria de la que están asistidos los juzgadores de instancia**; explicando que si el Juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, podrá escoger para fundamentar su decisión, aquél que le merezca mayor credibilidad.

De acuerdo a lo anterior, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, **la Juez de Primera Instancia dio plena validez a la calificación efectuada por el Médico Laboral José William Vargas Arenas, adscrito a la IPS Universitaria**, de fecha 21 de marzo de 2017, donde se asignó al demandante el 60.88% de pérdida de capacidad laboral, estructurada el día 23 de noviembre de 2011; exponiendo además que *asistió a audiencia apoyado en bastón y ayudándose de su compañera o cónyuge por lo que no le ha sido posible tener una rehabilitación mínima funcional.*

Debiéndose valorar la restante prueba pericial obrante en el expediente, con el fin de verificar si en realidad el demandante ostenta la calidad de inválido, para acceder a la pensión de invalidez; encontrándonos con que:

Tal como explicó la *a quo*, en el trámite del proceso en Primera Instancia, **La Equidad Seguros de Vida** emitió dictamen calificando al señor Marín Marín el día 31 de agosto de 2018, con el **22.55%** de pérdida de capacidad laboral de origen laboral, estructurada el día 9 de agosto de 2018, por el diagnóstico *fractura expuesta de tibia y peroné derechos*, concluyendo: “...**pronóstico funcional y ocupacional favorable** con recomendaciones, es independiente y autosuficiente en ABC y AVD, **puede trabajar en su labor habitual con adaptación del puesto de trabajo...**” (fls 173 a 175).

Previo a emitir decisión de fondo, **esta Judicatura decretó pruebas de oficio, remitiendo al señor Agustín de Jesús ante las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, para que fuera emitido dictamen médico laboral, a efectos de determinar la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración**, teniendo en cuenta toda la información médica obrante en el expediente, incluidos los dictámenes ya realizados; una vez recibidos los dictámenes, se dio traslado a las partes, dándoles oportunidad de manifestar lo que consideraran pertinente, etapa en la que el apoderado del demandante solicitó aclaración del emitido por la Junta Nacional, a lo cual se accedió por Auto del 15 de mayo de 2023, remitiendo el correspondiente cuestionario allegado, requerimiento que fue atendido por la entidad e igualmente puesto en conocimiento (carpeta 02).

Es así como, la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** mediante dictamen del 13 de agosto de 2022, asignó al demandante el **41.60% de pérdida de capacidad laboral** con origen en accidente de trabajo y **fecha de estructuración el 23 de noviembre de 2011** –data en que sufrió el accidente–, a partir de los diagnósticos *falta de consolidación de fractura (pseudoartrosis) tibia derecho y fractura de la diáfisis de la tibia derecha*; como conclusión se expuso: **pseudoartrosis de tibia derecha, que impide el apoyo de miembro inferior derecho para la marcha**. Por la pérdida de la funcionalidad de la pierna derecha, se califica por analogía con amputación a nivel de la fractura de la tibia (archivo 29 carpeta 02).

Por su parte, la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez** en dictamen de fecha 10 de febrero de 2023 asignó el **37.40% de pérdida de capacidad laboral** con origen en accidente de trabajo y **fecha de estructuración el día 6 de febrero de 2015** (archivo 48 segunda instancia), que obedece al momento en el que una vez finalizado el tratamiento se establecen las secuelas definitivas objeto de calificación, teniendo en cuenta los mismos diagnósticos que la Junta Regional. Por su pertinencia para la definición del caso bajo análisis, se transcriben los análisis y conclusiones consignados en esta calificación, **donde se controvierte el fundamento del dictamen de la IPS Universitaria**, al calificar lesiones del sistema nervioso central o periférico, cuando lo que el demandante presenta es *secuela de una fractura de la diáfisis de la tibia derecho*; además, **deja en evidencia que el médico de la IPS califica dos veces la misma deficiencia**, cuando la afectación del paciente está solo en la extremidad inferior derecha, por lo que afirma la Junta Nacional que **no tuvo en cuenta el informe de la IPS al no ser congruente**

ni con la historia clínica ... ni con el correcto uso del manual de calificación; advirtiéndole que la Junta Regional calificó una amputación de extremidad inferior por asimilación y sumó un dolor crónico, no siendo procedente, ya que no puede existir una calificación por encima de una amputación:

*“...La sala 4 revisó todos los elementos obrantes en el expediente y en la historia clínica aportada encontrando que obra en el expediente una **calificación de IPS universitaria del 21 de marzo del 2017** que califica una deficiencia por trastorno de postura y marcha **utilizando la tabla 12.3 la cual se utiliza es para calificar lesiones del sistema nervioso central o periférico cuando el paciente lo que tiene es secuela de una fractura de la diáfisis de la tibia derecha, es decir una lesión que no procede calificarse por la mencionada tabla,** aunado a que **califica doblemente la misma deficiencia** cuando es la extremidad inferior derecha la afectada únicamente, por lo cual no se tiene en cuenta dicha calificación **al no ser congruente ni con la historia clínica del paciente ni con el correcto uso del manual de calificación** de acuerdo a lo explicado. **La Junta Regional** por su parte califica una amputación de la extremidad inferior por asimilación utilizando la tabla 14.14 y adicionalmente le **suma un dolor crónico** por tabla 12.5 con 10% **el cual no procede toda vez que el calificar una amputación por asimilación abarca la totalidad de las deficiencias** a calificar, es decir tal como lo dice el mismo manual de calificación, no existe una calificación que esté por encima de una amputación; la amputación es la calificación máxima posible cuando se trata de una extremidad. El numeral 14.3.2 del manual de calificación claramente establece que: “en el caso de que el valor de la deficiencia global por cualquier daño de la extremidad, sobrepase el valor de la deficiencia global por amputación del segmento o estructura comprometida, esta debe ser igual al que corresponda a la deficiencia por amputación de dicho segmento...”.*

La Junta Nacional explica también que **el demandante puede desempeñar distintos oficios y/o ocupaciones**, desde la posición de sentado, con la debida capacitación y aclara que **ni aún una persona con amputación de una extremidad inferior, alcanzaría la condición de invalidez;** modificando también la fecha de estructuración para fijarla el día 6 de febrero de 2015 cuando finalizó el tratamiento, luego de múltiples intervenciones

quirúrgicas, inclusive con injerto óseo, momento en el que se pueden definir las secuelas:

*“...Respecto a la calificación del título II; encontramos que se ajusta a las deficiencias calificadas y a su rol ejercido como minero **requiriendo un cambio de ocupación previa capacitación**, tal como lo calificara la Junta Regional. **Si bien tiene una limitación para su desplazamiento, desde la posición de sentado puede desempeñar múltiples oficios y/o ocupaciones**. Cabe añadir que ni siquiera un paciente con amputación de una extremidad inferior adquiere la condición de invalidez de acuerdo al manual de calificación.*

***En cuanto a la fecha de estructuración**, la sala 4 se permite recordarle que la fecha de estructuración es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida de en su capacidad laboral de forma permanente y definitiva. **En casos de accidentes como el del paciente, no es la fecha del accidente** en sí toda vez que posterior al mismo **hubo un tratamiento posterior al cual se instauraron las secuelas definitivas** objeto de calificación, recordando que le hicieron **múltiples tratamientos quirúrgicos con osteosíntesis e injerto óseo**. El aspecto definitivo se refiere a la necesidad de agotar los tratamientos y procedimientos médicamente pertinentes para propender a la recuperación y rehabilitación de la persona, pues gran parte de las enfermedades o de los traumas, pueden presentar remisión (ausencia de enfermedad) o por lo recuperación funcional pese a la afectación que en determinado momento haya podido presentar la persona, cual consideramos acertada la fecha de la valoración de ortopedia del 06/02/2015 que obedece al momento en el que una vez finalizado el tratamiento se establecen las secuelas definitivas que son hoy objeto de calificación.*

La sala 4 procedió a calificar las deficiencias, y el título II, ajustándolas con las disposiciones del Decreto 1507/2014, en concordancia con las secuelas del accidente que presenta el paciente en su extremidad inferior, por lo tanto, se modifica el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez...”.

De acuerdo a lo expuesto, obran en el expediente cuatro (4) dictámenes de pérdida de capacidad laboral, siendo el elaborado por el Médico Laboral José William Vargas Arenas, el único que asigna un porcentaje de pérdida de capacidad laboral por encima del 50%, en este caso, del 60.88%; sin embargo, esta conclusión es controvertida y más aún, no fue tomada en cuenta por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para la

valoración del paciente, exponiendo en forma técnica las razones de su exclusión, esto es, ***al no ser congruente ni con la historia clínica del paciente ni con el correcto uso del manual de calificación.***

Téngase en cuenta además que, revisada la sustentación del dictamen en audiencia por el doctor Vargas Arenas, explicó que calificó la deficiencia por la marcha ya que la fractura no le permite apoyar el pie, ***asignando porcentaje de deficiencia para cada extremidad***, teniendo en cuenta que *la locomoción es una función que permite el desplazamiento y para ello se requieren ambas extremidades inferiores*; no obstante, en el acápite diagnóstico motivo de la calificación se describe *secuelas fractura tibia y peroné derechos* (fl 17); ***no encontrándose coherente que, si la afectación física se dio en el pie derecho*** -como se afirmó en la demanda, así fue reportado en el informe de accidente de trabajo y está sustentado en la historia clínica-, ***se emita un dictamen de pérdida de capacidad laboral trasladando en forma automática esa misma afectación también al pie izquierdo***; incoherencia advertida en el análisis de la Junta Nacional, al explicar que ***la IPS califica doblemente la misma deficiencia cuando es la extremidad inferior derecha la afectada únicamente.***

Ahora bien, la apoderada de la aseguradora demandada sostiene que el dictamen emitido por La Equidad Seguros de Vida se encuentra en firme y surte plenos efectos jurídicos, al no haber sido objetado por ninguno de los interesados; aspecto en el que no le asiste razón, toda vez que como se explicó en precedencia, los dictámenes son prueba no solemne y pueden ser objeto de controversia ante la Justicia Laboral Ordinaria, como en este caso.

Y al contarse en el proceso con dictámenes emitidos por diferentes entidades, conceptuando disímiles porcentajes de pérdida de capacidad laboral, esta Judicatura decretó la práctica de otras pruebas, con el fin de contar con mayores elementos de persuasión, ya que la calificación de la pérdida de capacidad laboral tiene un trámite reglado, con apego al Manual Único de Calificación vigente, para su definición se requiere de unos conocimientos técnicos y científicos de los que carece el operador judicial y que ostentan los miembros de los organismos especializados a los que el legislador asignó dicha función, como son **las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez**, entidades que luego de un estudio detallado y sustentado del caso, en línea con la conclusión de la aseguradora demandada, aunque con porcentajes diferentes, **concluyeron que las deficiencias físicas que padece el señor Marín Marín no le otorgan el estado de invalidez**, para lo cual **se exige un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, no alcanzado por el paciente puesto que fue calificado por dichas entidades con el 41.60% y 37.40%, respectivamente.**

Siendo estas evaluaciones emitidas por entidades especializadas en el tema de Salud Ocupacional y calificación de merma de la capacidad laboral, de reconocida trayectoria e idoneidad y en ellas las Juntas de Calificación explicaron de manera detallada la relación de documentos tenidos en cuenta, el examen físico, la historia clínica, ayudas diagnósticas, exponiendo también los fundamentos técnicos que controvierten la conclusión del aportado con la demanda.

Es de anotarse que, tal como explicó la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, **las condiciones de salud pueden variar con el transcurso del tiempo**, dependiendo de la evolución de las patologías y **eventualmente, el demandante podrá acudir de nuevo a valoración para obtener otra calificación de pérdida de capacidad laboral, en caso de considerarlo pertinente.**

Así las cosas, de acuerdo a las pruebas practicadas en el trámite del proceso, esta Sala de Decisión Laboral concluye que le asiste razón a la apoderada de la demandada, por cuanto el demandante no cuenta con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% para acceder a la pensión de invalidez; siendo procedente **revocar** la Sentencia de Primera Instancia y en su lugar, se **absolverá** a La Equidad Seguros de Vida de las pretensiones formuladas en su contra.

COSTAS:

No se condenará en Costas en Segunda Instancia, conforme a lo establecido en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso según el cual “*Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación*” y Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura; teniéndose en cuenta que el demandante era trabajador en una mina, tiene una pérdida de capacidad laboral significativa, con pérdida parcial de extremidad

inferior, existiendo en el proceso un dictamen anterior que le favorecía en sus pretensiones, lo que justifica el haber iniciado el proceso ante la jurisdicción, en búsqueda de la satisfacción de sus pretendidos derechos fundamentales.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **REVOCA** la Sentencia de Primera Instancia que por vía de apelación se revisa; en su lugar, se **ABSUELVE** a **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA** de las pretensiones formuladas en su contra por el señor **AGUSTÍN DE JESÚS MARÍN MARÍN**; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: **No se condena en Costas en Segunda Instancia**, según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

**Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación
se relaciona:**

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **AGUSTÍN DE JESÚS MARÍN MARÍN**
Demandado : **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA**
Radicado : **05001 31 05 020 2017 00291 01**
Providencia : Sentencia
Temas y : Seguridad Social – pensión de invalidez de origen
Subtemas : laboral -
Decisión : Revoca sentencia condenatoria
Sentencia No : 174

FECHA SENTENCIA:

25 de agosto de 2023

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Fijado hoy martes 29 de agosto de 2023 a las 8:00 a.m.

Desfijado hoy martes 29 de agosto de 2023 a las 5:00 p.m.

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario